

Menu

nexos

[\(http://www.nexos.com.mx/\)](http://www.nexos.com.mx/)

Equidad y desarrollo

1 ABRIL, 1993

David Ibarra ()

2013 - Nexos - www.nexos.com.mx

David Ibarra. Economista. Asesor de la Dirección General de Pemex. Una versión más amplia de este trabajo se publicará próximamente en un libro de ensayos en honor de Fernando Fajnzylber.

La llamada década perdida no ha dejado de marcar los caminos económicos de América Latina. Desde la atalaya de liberalismo y el mercado, el futuro de la región se perfila -según refiere el autor de este ensayo- como un ajuste de cuentas con respecto a esos años, pero también como una ampliación de las desigualdades sociales.

<http://www.nexos.com.mx/?p=6745>

09/07/2014

El décimo aniversario del inicio de la crisis latinoamericana pasó casi inadvertido: es ahora cuando una seria reflexión sobre su trascendencia de largo plazo empieza a tener lugar en la región. Incontables cuartillas se han llenado describiendo los efectos económicos y sociales de la década perdida, así como de sus implicaciones políticas. En un último análisis, la dinámica infernal desencadenada a raíz de la suspensión de pagos de México en aquel fin de semana de agosto de 1982, marca nítidamente el fin del auge de la posguerra. América Latina no sólo perdió una década de crecimiento, todavía busca el camino que concilie las exigencias del neoliberalismo con el desarrollo sostenido y la satisfacción de las carencias y polarizaciones propias del Tercer Mundo. Ahora es una región sin un paradigma acabado, ordenador de sus problemas, o para ser más precisos, se ha importado un paradigma disonante con algunas de las circunstancias privativas del hemisferio.

Hasta el decenio de los sesentas, se pensaba que los países industrializados habían encontrado una senda estable de progreso por donde podrían avanzar con seguridad, sin mudanzas importantes en el modo de concebir al mundo y sus problemas, si se exceptúa el reto planteado por el bloque socialista. Mayores conmociones habrían de sufrir las naciones en desarrollo, pero en cualquier caso la brecha del atraso se resolvería a imagen y semejanza de las historias del Norte industrializado.

Entre los años cuarenta y los sesenta, realidad y concepciones económicas dominantes caminan de la mano. En ese tiempo la economía internacional, y en particular América Latina, experimentan el periodo más prolongado de auge de que se tenga memoria. Empleo pleno o desarrollo, avanzan armónicamente con el Estado Benefactor y el afianzamiento de los valores democráticos en el mundo occidental. Ese universo, con un presente ordenado y un futuro predecible, se ha desvanecido. No es que las necesidades de transformación de las zonas atrasadas hayan desaparecido, sino que se

plantean revoluciones de magnitud semejante a las del Norte industrializado y se alteran con rapidez inusitada las bases mismas de las relaciones económicas y de poder entre las naciones.

Los paradigmas económicos de la posguerra han periclitado. Debido a un conjunto complejo de causas, los objetivos del empleo, el desarrollo y la equidad han cedido el paso a los de la eficiencia, la competitividad y la protección ecológica. Hoy vale menos la justicia social y más la libertad económica; más la calidad de vida que el desarrollo, sobre todo el desarrollo del Tercer Mundo.

Urbi et orbi, se exaltan los méritos del mercado, de la apertura externa, de la eficiencia productiva. Y hay cierta razón en ello, si se toma como punto de partida el agotamiento de las estrategias sustitutivas en América Latina y la pérdida secular de participación en las corrientes de la exportación mundial. De la misma manera, se aboga en favor de la reforma del Estado. Al elevarse la libertad económica a objetivo social fundamental, el mejor Estado es el que menos hace, el que se desembaraza de funciones y, en ese proceso, queda liberado de las exigencias -de otro lado, difíciles de satisfacer en la crisis- de atender a las demandas multiplicadas de la población. Y también aquí hay alguna razón, por cuanto la acumulación histórica de funciones y regulaciones estatales creó una maraña de prelações, muchas de las cuales habían perdido importancia con el correr del tiempo.

Pero también ha de admitirse que esos enfoques doctrinarios tienen el efecto de inclinar la balanza del poder político en favor del mercado, de las empresas y de los empresarios. En el campo económico, ello se traduce en un reforzamiento sistémico de sesgos distributivos polarizadores que acaban por enturbiar la legitimidad de los gobiernos.

América Latina ha abrazado -por vocación propia o, mejor, por imperativos mundiales- las nuevas doctrinas económicas y sociales que quieren poner coto al Estado Benefactor a fin de atender las demandas de un mundo multipolar en competencia exacerbada. Esos cambios en el modo de percibir al mundo y de reedificar la escala de valores humanos, coincide, para nuestro infortunio histórico, con otra serie de problemas y exigencias internas de transformación, también asociadas a inevitables costos sociales. Ha de alterarse el patrón sustitutivo de industrialización, fortalecerse el proceso de formación de ahorros y capitales, atenderse al crecimiento urbano anarquizado, protegerse el medio ambiente, detenerse la inflación o procurarse un equilibrio razonable de las cuentas externas y de las cuentas públicas. Y esa lista incompleta de lo que hoy se denominan componentes del proceso de ajuste, se traduce casi inevitablemente en sacrificios o en posposición de avances de nuestros incipientes sistemas de derechos y garantías sociales.

Hay prisa no sólo en finiquitar las reformas estructurales que nos permitan la incorporación a las normas internacionalmente estandarizadas de conducta y de organización institucional, también la hay en satisfacer las exigencias más estrictas de la estabilización y el ajuste económicos que están en boga en el mundo.

En ambos terrenos, América Latina se pone en la delantera. Seguramente con el mejor de los realismos se piensa en buscar el más apresurado acomodo a los paradigmas económicos e ideológicos consagrados, so pena de quedar trágicamente marginados en un orden internacional cada vez más exigente y menos tolerante con oposiciones y desviaciones. Y en función de tal visión, se viene acelerando la historia y los tiempos de asimilación de los sacrificios, costos y exclusiones, que demandan siempre acomodos sociales de gran envergadura.

Se ha escogido el camino de la adaptación, no el de la confrontación, acaso pensando correctamente en que estando dominado el mundo por la irresistible avalancha del monismo doctrinario del poder, toda resistencia es, a la postre, inútil. Y quizá también se acierte en pensar que quienes más ortodoxa y rápidamente se incorporen a los valores y a la praxis de los paradigmas del neoliberalismo, recibirán las mejores recompensas, dada la capacidad limitada del primer mundo para incorporar a las zonas en desarrollo -como lo prueba el caso de Alemania Oriental- y el problema de composición que surge cuando todas las naciones en desarrollo impulsan simultáneamente estrategias similares de modernización y crecimiento hacia afuera.

Crisis y presión externa han cerrado opciones alternas y vienen creando una impresionante uniformidad -pese a la diversidad de circunstancias e instituciones de los países- en las políticas económicas y en la visión política de los pueblos latinoamericanos. Todo ello va más allá de la reconsideración de los errores del pasado o de la falta de contrapesos ideológicos creada por el derrumbe de las economías socialistas.

Doctrinas sociales e ideologías, siempre guardan relación estrecha con las circunstancias de las sociedades donde florecen. El subdesarrollo implica incapacidad cultural e institucional para generar paradigmas propios o debilidad para imprimirles algún grado de universalidad o siquiera para implantarlos como opción propia. La historia de América Latina es en parte el recuento de los sacrificios y acomodos en la adaptación de paradigmas foráneos que embonan más o menos imperfectamente a nuestra realidad e intereses.

Por más que no haya otra opción, la asimilación del neoliberalismo supone asumir los costos de disonancias históricas flagrantes. En efecto, transferir funciones del Estado al mercado implica dar una mayor cuota de poder al empresariado, a pesar de que el

fortalecimiento de los valores de la democracia pediría, más bien, ensanchar la participación de las altas proporciones de la población imperfectamente incorporadas a la vida moderna; ha de alentarse la democracia de grupos plurales, cuando la democracia individual y de partidos reconoce graves rezagos; ha de ahondarse el retraso en la satisfacción de las demandas sociales, cuando el Estado Benefactor apenas alcanza una evolución embrionaria; ha de abrazarse como criterio rector del análisis económico la cuestión de tornar eficiente la asignación estática de recursos, frente a los problemas dinámicos aún vigentes del atraso, la pobreza y la ignorancia generalizados.

Quiérase o no, la reforma económica en América Latina, por muchas que sean sus virtudes, incorpora elementos que acentúan, en vez de corregir, la propensión a la desigualdad de las economías de mercado. Al parecer se ha relegado al olvido un hecho conocido y bien experimentado: el funcionamiento del mercado, si bien facilita la formación de capital y la eficiencia productiva, premia en exclusiva a los ganadores de la competencia. Y al hacerlo propicia disparidades sociales insostenibles a la larga, así como la multiplicación de formas monopólicas de producción que cancelan muchas de las ventajas del propio modelo clásico de competencia. El mercado, con sus relaciones desiguales en la división del trabajo y parcialmente iguales en el intercambio, está intrínsecamente imposibilitado -por sí mismo, esto es, sin el poder atemperador del Estado- para procurar la equidad distributiva.

La vieja distribución internacional del trabajo ha quedado enteramente rebasada. Siempre resultó desventajoso producir materias primas, hoy constituye una verdadera tragedia. A marchas forzadas estamos obligados a transformar el modo latinoamericano de inserción en los mercados mundiales, sin haber concluido el ciclo de tránsito del proteccionismo al laissez-faire -que cumplieran países como Estados Unidos, Alemania, Japón o Corea-. Por consiguiente, teniendo serias desventajas

tecnológicas, el punto de arranque ha de encontrarse en la utilización de mano de obra barata en actividades transformadoras o de servicios, como medio de ganar la indispensable competitividad externa. Es decir, aquí se topan obstáculos que contrarían, al menos temporalmente, las aspiraciones de justicia social.

La apertura externa entraña una decisión que altera o desplaza todo el sistema vernáculo de formación de precios a fin de adaptarlo o reemplazarlo por estructuras integradas en el exterior. Los precios están en buen grado determinados por los costos relativos de la mano de obra con respecto al capital, y por una tecnología que propende entre otras cosas a sustituir al factor o factores más escasos. Por consiguiente, ese reemplazo del sistema de precios supone aceptar el divorcio entre la dotación interna de recursos y unos precios que responden a las composiciones diferentes de factores en el exterior. Ello equivale a la aceptación de convivir con desequilibrios estructurales mayores en el mercado de factores y entre éste y los mercados de bienes. En consecuencia, la asignación de recursos no resultaría la mejor -estaría alejada del óptimo de Pareto-, aumentando la escasez de ahorros y capitales, y forzando la aceptación de mayor desocupación o subocupación de la mano de obra.

Asimismo, la apertura externa implica alterar la estructura de los precios relativos en favor de los llamados bienes comercializables, esto es, deteriorar los ingresos del segmento de productores de subsistencia y de la pequeña y mediana empresa que sirven al mercado interno; implica también la desaparición de negocios y empleos incapaces de competir, así como emprender vastos programas de reconversión industrial. Adviértase que ese último esfuerzo inversor no se encamina a producir más o a generar más ocupaciones, sino a producir mejor, casi siempre con menos fuerza de trabajo. A su vez, la liberalización al acrecentar el contenido importado de insumos y bienes de capital reduce los encadenamientos interindustriales, debilitando la

generación de ocupaciones por unidad de producto o de inversión. Hay, entonces, oposiciones entre los objetivos de la eficacia y los de la igualdad o del empleo, al menos durante el periodo de transición al nuevo modelo económico.

El acomodo de las cuentas externas debe lograrse, además, en circunstancias que obligan a transferir anualmente entre 20 y 30 mil millones de dólares, alrededor del 34% del producto latinoamericano por servicio de la deuda externa. Se exportan ahorros que obligan no sólo a configurar procesos recesivos de ajuste, sino también a retribuir sesgadamente a los factores productivos, como lo prueban las elevadas tasas de interés y los salarios a la baja que prevalecen en la región.

Ahí no acaba la historia. Las finanzas públicas tienden a alterarse de modo que no alientan tampoco a la equidad distributiva. Del lado de los ingresos, los tributos al comercio de exportación están forzados a perder importancia; a ganarla los impuestos indirectos -descontables del costo de las exportaciones-, y a homologarse con las prácticas internacionales, las que recaen sobre la renta de las empresas y personas físicas. Como en los países industrializados se piensa que los impuestos a la renta y al patrimonio son excesivos, la tendencia mundial obliga a desgravar capitales y utilidades, y a restar progresividad a las tarifas. La carga fiscal se desplaza a los impuestos a las ventas o al consumo, a los gravámenes a la renta de los trabajadores y de otros causantes cautivos; y esto tiene que hacerse de modo proporcionalmente mayor, ya que la base de contribuyentes de los impuestos directos y los costos de cobranza a causantes menores tienden a comprimir la recaudación impositiva directa de los países del Tercer Mundo.

Por eso, en los programas de ajuste fiscal se insiste mucho más en la reducción de los gastos que en el ensanchamiento de los ingresos como medio de cerrar los desequilibrios fiscales. Sin duda, los gobiernos han sabido desembarazarse de

actividades costosas y han dejado de atender otras de dudosa prelación. Pero también se han visto obligados a debilitar el apoyo a campos importantísimos, como los que se refieren a la infraestructura física, a la formación del capital humano o a la justicia social. En los hechos, han tenido que desplazarse o abandonarse erogaciones de la más alta significación con el fin de cubrir la meteórica alza del servicio de la deuda pública. Todavía durante 1989, en México -que junto con Chile ha avanzado más en completar el ajuste en América Latina- los pagos por intereses representaron alrededor del 50% de las erogaciones corrientes del gobierno, mientras a lo largo del decenio de los ochentas el gasto real en desarrollo rural per cápita cayó 60%, el gasto social 29% y 33% el relacionado con el fomento económico y la infraestructura (comunicaciones y transporte, energía, desarrollo industrial).

Hoy, el esfuerzo de racionalización presupuestaria consiste muchas veces en recortar o aplazar lo que siendo prioritario causa menos estragos económicos y sociales o enfrenta menos resistencias políticas. Por consiguiente, el ajuste fiscal ha tomado características predominantemente recesivas y afectado a los grupos sociales más débiles o con menor capacidad organizativa.

Lo que distingue a la crisis fiscal latinoamericana es que muchas demandas internas han debido hacer lugar a reivindicaciones de actores externos y luego de nuevos o más exigentes protagonistas vernáculos. Así se estrecha la capacidad estatal de solución y articulación de conflictos. Satisfacer, por ejemplo, las demandas de los prestamistas del exterior o de los grupos militares debilita la capacidad estatal de dar salida a los conflictos, porque empobrece los márgenes de maniobra, exacerba las tensiones distributivas internas y debilita la formación del capital social básico.

Por todo eso, las sociedades latinoamericanas vienen quedando escindidas en materia distributiva, ahondando problemas que no se resolvieron durante el auge de la posguerra. Los fenómenos de concentración no sólo se dan en un sentido estático, sino también dinámico. El reparto de las rentas ha dejado de hacerse de arriba hacia abajo, para concentrarse en movimientos horizontales que más que distribuir ingresos distribuyen pobreza.

El impacto de la crisis y de los acomodos estructurales vienen determinando la reducción en el ingreso por habitante, el empleo, los salarios reales, los subsidios a los pobres y el aumento de impuestos indirectos y precios de los servicios públicos, sobre todo en las ciudades; en el mismo sentido, influye el debilitamiento de los sindicatos, las modificaciones legislativas a las leyes laborales o a las de seguridad social. Se deterioran las pequeñas y medianas empresas, crece por marginación el sector informal y tiene lugar un intenso proceso de concentración patrimonial y de capitales.

La economía subterránea es en parte una respuesta creativa a la falta o reducción de oportunidades de trabajo en el sector moderno de la economía; pero también refleja un serio retroceso en la protección de los segmentos sociales más débiles. En más de un sentido, el secreto de la competitividad de la producción informal reside en pasar por alto el pago de impuestos o en renunciar a la prohibición del trabajo infantil, a los derechos de la seguridad social y a las limitaciones de la jornada laboral.

En cualquier caso, las evidencias del deterioro social en la década perdida de los ochentas, son irrefutables pese a la notoria ausencia de información estadística completa. El 75% de la población de menor ingreso ha visto deteriorar en mucho su participación real en el producto, el 20% que sigue lo ha hecho en alguna medida y sólo el 5% ha visto crecer sus ingresos reales. El ingreso medio por habitante ha caído entre el 8 y el 10% y en algunos casos -El Salvador- hasta el 25%. El número de hogares

con ingresos inferiores al promedio ya alcanza cifras superiores al 70%; los salarios reducen apreciablemente su participación en el producto (en México los salarios cayeron del 36 al 26% de esa variable entre 1980 y 1988).

El número de hogares por debajo del umbral de la pobreza subió del 35 al 37% entre 1980 y 1986, revirtiendo una tendencia de más de tres décadas, y el número de pobres pasó del 41 al 43% en los mismos años. Los trabajadores por cuenta propia -la economía informal- han crecido en números absolutos y relativos alrededor de 2 puntos de la población económicamente activa entre 1980 y 1986. Correlativamente ha crecido el desempleo abierto y el subempleo. La desindustrialización y la pobreza empiezan a invadir los centros urbanos, antes prósperos. El ingreso promedio de los trabajadores y empleados de 25 a 59 años que laboran más de 20 horas semanales en las ciudades, cayó 11.3% en las zonas metropolitanas y 13.5% en otros centros urbanos en ese mismo lapso.

Finalmente, conforme a las encuestas disponibles el cuartil más bajo de la población alcanza ingresos que apenas fluctúan entre el 4 y el 10% del valor agregado total de los países, mientras que el cuartil superior absorbe entre el 45 y el 66% del producto.

Hay, sin embargo, indicadores que han ido mejorando: la mortalidad infantil, la esperanza de vida o los años de escolaridad. Pero ello no siempre refleja genuinas políticas distributivas -aunque se reconocen esfuerzos positivos en elevar la eficacia de las erogaciones públicas en algunas áreas-; con frecuencia ese fenómeno obedece a rezagos entre la reducción del gasto social o privado y sus efectos, a cambios tecnológicos tomados del exterior o a ahorros en los costos de los servicios sociales a partir del deterioro de las remuneraciones de los trabajadores y los empleados públicos.

ILUSTRACION DE ROSA MARIA RODRIGUEZ

Más todavía, el tipo de transformaciones económicas que toma cuerpo en el Primer Mundo se traduce en un debilitamiento de la base económica donde se asentaban los esfuerzos por imprimir equidad y capacidad de crecimiento al Tercer Mundo. El avance tecnológico -importantísimo en otros aspectos- no sólo se acelera, sino reduce el contenido de materias primas -nicho latinoamericano- en la producción industrial; muchos de los bienes agrícolas de exportación tropical enfrentan cambios desfavorables en los gustos de la población mundial consumidora; los nuevos núcleos dinámicos de la economía internacional se vinculan a los servicios y a sectores de avanzada que están frecuentemente fuera del alcance de las especializaciones presentes del Tercer Mundo. Por consiguiente, el comercio internacional parece haber perdido algunas de sus capacidades dinámicas de servir de cadena transmisora del desarrollo en favor de los países periféricos.

Asimismo, el ciclo de la producción y de numerosos productos a escala universal, marca el declive de actividades con altos multiplicadores de empleo (y de empleo en tramos semiprofesionales bien pagados); hoy los servicios son el nuevo núcleo dinámico de desarrollo. Tales fenómenos tienden a polarizar el mercado de trabajo entre técnicos y profesionistas con altas remuneraciones, de un lado, y, de otro, una gran masa de trabajadores de bajas calificaciones. La clase media estadounidense, para citar un caso, se ha visto reducida de manera espectacular en la última década.

Es entonces inescapable la conclusión de que la estabilidad, el ajuste económico y el tipo de transformaciones estructurales que se implantan en América Latina refuerzan sesgos sistémicos proclives a crear desigualdades en el reparto de los ingresos y a extender el ámbito de la pobreza. Tal ha sido la evolución más característica e irrefutable de la década de los ochentas.

En el plano conceptual hay riesgo de caer en una suerte de neopositivismo que evade la discusión sustantiva, crítica, abierta de los grandes o pequeños objetivos sociales para sustituirla por un análisis supuestamente objetivo y científico de la economía de mercado, adosado a simples formalismos electorales. Ya es tiempo de descartar la noción de la armonía intrínseca entre metas económicas y entre éstas y las de carácter social o político, como la libertad, la igualdad, la justicia, la verdad o el perfeccionamiento de la democracia. Y si se admite que pueda existir desarmonía u oposición entre los objetivos, habría que aceptar como inválida o incompleta la reducción de los fenómenos sociales a categorías predominantemente económicas. Quiérase o no, la presencia evidente de problemas extraeconómicos explica la coexistencia de racionalidades distintas que alimentan simultáneamente al proceso de decisiones de Estados y gobiernos. En particular, la oposición y lucha entre la lógica política y la razón económica es una experiencia común. Hay entonces dilemas axiológicos que en el estado actual de las ciencias sociales sólo pueden resolverse por la vía pragmática de la reconstrucción democrática de los consensos sociales. En principio, no parece admisible ceder en el terreno de la libertad a fin de asegurar mejores condiciones de vida a la población, ni dejar de luchar por este último objetivo para liberar de trabas al hombre económico.

La democracia sale perdiendo cuando se evade el debate sobre los fines sociales entre los cuales está la asignación desigual de los costos y beneficios de la modernización: no porque se violenten las formalidades, sino porque se crean compartimentos diferenciadores entre grupos de ciudadanos, supuestamente iguales. La libertad y la justicia distributiva se cuentan entre los objetivos de toda sociedad. Con todo, otorgar libertad plena a los más poderosos o mejor dotados no es compatible con los derechos a una existencia digna de los débiles o los marginados. Hasta cierto punto es

razonable sostener que la satisfacción de necesidades básicas de los hombres tenga alguna prelación sobre el criterio estricto de los merecimientos en materia de distribución de los frutos del desarrollo.

Sin desmedro de reconocer la fuerza ideológica de los nuevos paradigmas -y de la de los medios de comunicación- que han racionalizado, validado y creado una insospechada capacidad de resistencia de los grupos perdedores -no han expresado mayores quejas, si se excluyen algunas explosiones de violencia en Venezuela o Brasil, o las endémicas del Perú-, la redistribución regresiva de las rentas terminará por polarizar excesivamente a la pobreza y la riqueza. Así se incuban las tensiones sociales, y la democracia y los mercados internos se debilitan de modo acaso inconveniente.

Sin embargo, a la luz de lo dicho hasta aquí, por lo menos cuatro recomendaciones debieran formar parte de la agenda de acción de los gobiernos: en primer término, se justifica enriquecer orgánicamente las políticas de protección social a fin no sólo de compensar ex-post, sino corregir ex-ante, los efectos más intensamente polarizadores de las estrategias y transformaciones económicas que tienen lugar, y cuya implantación parece rebasar el ámbito cada vez más angosto de las autonomías nacionales. En segundo lugar, habría que fortalecer los mecanismos de expresión democrática, desviados por la fuerza de ideologías que oscurecen los verdaderos intereses y las realidades del grueso de la población latinoamericana; hay que abrir inexcusablemente la discusión sobre los grandes objetivos de la sociedad, en vez de tomarlos, de afuera, como dados, tanto como sobre la distribución de beneficios y costos de las transformaciones y ajustes. También convendría ejercer presión en los foros internacionales para favorecer estrategias expansivas en el modo de atacar los procesos internacionales de ajuste, por cuanto el crecimiento facilita la realización de acomodados y transformaciones económicas, con menores costos sociales.

Singularmente debieran abandonarse o paliarse las fórmulas contraccionistas en boga,

cuya expresión más obvia se encuentra en el tratamiento de los problemas de la deuda y del ajuste latinoamericanos, así como del desequilibrio externo de pagos de los Estados Unidos.

Por último, cabría reducir a su mínima expresión el gasto militar que ha perdido la justificación que pudiera habersele otorgado en el pasado con relación al conflicto Este-Oeste. El dividendo de la paz es una cuestión que no debiera dejarse escapar. A escala latinoamericana permitirían liberar y recanalizar recursos en favor del capital humano; a escala universal haría factible renovar la ayuda al desarrollo.

De no intentarse esas y otras medidas correctivas -en sí mismas modestas-, el riesgo no sólo es el de la desigualdad y la inestabilidad sociales, sino el de crear un círculo vicioso, cada vez más difícil de corregir, donde los pobres lo son cada vez más y quedan condenados a seguir siéndolo por generaciones. En efecto, la desnutrición, la falta de acceso a la educación, el trabajo infantil, la morbilidad ya colocan a la población marginada en una situación de inferioridad e indefensión crónicas. Proteger la ecología -tema hoy importante y de moda- debiera contemplar en primer término la protección del género humano.

1993 Abril (<http://www.nexos.com.mx/?cat=2922>).

nexos *hoy*

MIÉRCOLES, 9 DE JULIO DE 2014

TELECOMUNICACIONES
